En actividades de procesos de seguimiento o actualización de certificaciones, realizadas por parte de organismos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o productores declarantes de la conformidad, serán aplicables las tolerancias dispuestas para las autoridades de control.”

11) Se modifica el numeral tercero del artículo 22 sobre la transitoriedad de entrada en vigencia de equipos que se incluyan por primera vez en el ámbito regulatorio del reglamento, así:

“3. Cambios en requisitos de etiquetado de equipos previamente certificados:

*Expedida una resolución con la cual se adicione, modifique o sustituya el RETIQ, los Organismos de Certificación, como parte del proceso más próximo de vigilancia programada de su acreditación, deberán actualizar ante el ONAC su alcance de acreditación específico, ajustándose a lo dispuesto en ella, así como a las resoluciones que hayan sido expedidas previamente y que estén vigentes. Si transcurrido un plazo de 15 meses contados a partir de la fecha de publicación en el **Diario Oficial** de la resolución, el Organismo de Certificación no ha actualizado el alcance de su acreditación, este no podrá expedir nuevos certificados o renovar aquellos previamente emitidos hasta que logre su actualización.*

El organismo de certificación, una vez ampliado el alcance de su acreditación, actualizará, en función del esquema aplicado, los certificados vigentes, mediante la realización de las actividades de evaluación que resulten necesarias, o la validación de las que en atención a lo dispuesto en el numeral 4 anterior, previamente haya realizado.”

12) Modificar el numeral quinto del artículo 22 sobre la transitoriedad de entrada en vigencia de equipos que se incluyan por primera vez en el ámbito regulatorio del reglamento, así:

“5. Inclusión de nuevos equipos al RETIQ:

Expedida una resolución con la cual se adicionen nuevos productos al ámbito regulatorio del RETIQ, se tendrá una transitoriedad de un año para hacer exigible el cumplimiento de los requisitos. Dicho plazo será contado a partir de la entrada en vigencia de la resolución que incluya los productos. Esto ocurrirá siempre y cuando dicha resolución no especifique una fecha o período transitorio particular para exigibilidad de los requisitos del producto.”

Artículo 3°. Se elimina el numeral 7.4.4 “Métodos de ensayo para el Nivel de presión sonora” del RETIQ.

Artículo 4°. Se suspende la aplicación de la norma ISO 16358-1:2013 como norma base obligatoria para la implementación de los métodos de ensayo en acondicionadores de aire, según lo dispuesto en el artículo segundo, numerales dos y seis de la Resolución 40247 del 2020.

Parágrafo. Dicha suspensión se dará hasta que el Ministerio de Minas y Energía realice un estudio detallado de las posibles alternativas normativas que se tienen a nivel internacional, y hasta que se garantice que se cuenta con todas las herramientas técnicas para una correcta implementación de la norma.

Artículo 5°. Suspender la entrada en vigencia de los requisitos estipulados en el artículo octavo del RETIQ, para los equipos de ACONDICIONADORES DE AIRE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO SUPERIOR A 10.540 Y HASTA 17.580 VATIOS.

Parágrafo. La mencionada suspensión se dará en los mismos términos del parágrafo del artículo anterior.

Artículo 6°. Se suspende lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resolución 40094 del 2020, hasta que el Ministerio de Minas y Energía elabore un AIN, que estudie las tendencias regulatorias internacionales para determinar si incluye dentro del alcance del RETIQ los equipos de bombeo y su desempeño energético como conjunto motor-bomba.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de su fecha de expedición. Esta deroga las disposiciones que le resulten contrarias de las adiciones y modificaciones llevadas a cabo con anterioridad. Las demás disposiciones del RETIQ continúan vigentes.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

Que el artículo 24 de la Ley 594 de 2000, establece la obligatoriedad para las entidades del Estado, de elaborar y adoptar las Tablas de Retención Documental;

Que el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014, establece que “Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de Información cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio Público y con aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, en relación con la constitución de las Tablas de Retención Documental (TRD) y los inventarios documentales”;

Que el Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 4°, establece la información mínima requerida a publicar, entre los cuales se encuentran las Tablas de Retención Documental, entre otros instrumentos archivísticos;

Que el artículo 9° del Acuerdo 004 de 2019, “Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD)”, establece que las Tablas de Retención Documental (TRD) deberán ser aprobadas por el Comité Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité;

Que el artículo 11 del Acuerdo 004 de 2019, dispone que las instancias competentes deberán verificar que las Tablas de Retención Documental (TRD) como mínimo cuenten con la documentación necesaria para adelantar el proceso de convalidación y de igual forma con los requisitos técnicos;

Que mediante la Resolución número 26051 del 21 de noviembre de 2017, el Ministerio de Educación Nacional actualizó los Comités Sectorial e Institucional de Gestión y Desempeño y se derogó la Resolución 21392 de 2014;

Que mediante las sesiones realizadas el 27 y 28 de febrero de 2020, el Comité de Gestión y Desempeño aprobó las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación Nacional;

Que mediante Resolución 004176 del 19 de marzo de 2020, se aprobó la nueva versión de las Tablas de Retención Documental (TRD) del Ministerio de Educación Nacional que se presentó ante el Archivo General de la Nación para su convalidación;

Que el Ministerio de Educación Nacional solicitó al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, la convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) el 19 de marzo de 2020, mediante Radicado 2020-EE-063897, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.8.2.2.1 del Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 004 de 2019;

Que en concordancia con los artículos 10 y 11 del Acuerdo 004 de 2019, el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado consideró que las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación Nacional, cumplen con los requisitos técnicos archivísticos para ser convalidadas, tal como se documentó en el concepto técnico del 10 de junio de 2020 y el acta de la mesa de trabajo del 16 de septiembre de 2020;

Que el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, procedió con la convalidación de las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación Nacional, mediante certificado de convalidación del 17 de diciembre de 2020;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo 004 de 2019, las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación Nacional, reúnen los requisitos de aprobación y convalidación, por lo que se realizó su inscripción en el Registro Único de Series Documentales bajo el siguiente número: TRD-301 el 17 de diciembre del 2020;

Que mediante comunicación radicada con el Consecutivo número 2-2020-11741 el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado remitió el certificado de convalidación de la actualización de las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación Nacional con fecha del 17 de diciembre de 2020;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación Nacional, convalidadas por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, mediante certificado de fecha 17 de diciembre de 2020.

Artículo 2°. Ordenar a todas las dependencias, Grupos Internos de Trabajo creados o modificados y contratistas externos e internos del Ministerio de Educación Nacional, la aplicación y el uso obligatorio de las Tablas de Retención Documental (TRD).

Artículo 3°. Publicar la presente resolución y las Tablas de Retención Documental (TRD) en el enlace (link) de transparencia del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 004 de 2019 expedido por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.

Artículo 4°. Realizar a través de la Secretaría General del Ministerio de Educación Nacional, el seguimiento a la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y en caso de encontrar inconsistencias informará al Grupo de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Educación Nacional (MEN), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo 004 de 2019.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 005220 DE 2021

(marzo 29)

por la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Educación Nacional.

La Secretaria General, en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 5012 de 2019, la Ley 594 del 2000, el Acuerdo 004 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado;

Artículo 5°. Derogar la Resolución 004176 del 19 de marzo de 2020, mediante la cual se aprobó la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD), teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.

La Secretaria General,

Clara Inés Páez Jaimes.

(C. F.)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0206 DE 2021

(marzo 26)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	CÓDIGO	GRADO
ANDREA ESTEFANÍA	ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ	1073693108	SECRETARIO DE DESPACHO	5550	---

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000012995 DE 2021

(marzo 29)

por la cual se delegan unas funciones.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las dispuestas en el artículo 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, los numerales 18 y 19 del artículo 8° del Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que según los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y para el cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, tal función puede desarrollarse a través de la delegación de funciones;

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 señala que las autoridades administrativas podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellas confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos del nivel directivo y asesor, vinculados al organismo correspondiente;

Que, de conformidad con lo expuesto, los actos que deba expedir el funcionario delegado están sometidos a los mismos requisitos establecidos por la Constitución y la ley para el representante legal de la autoridad administrativa, por lo que las actuaciones de quienes intervengan se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia;

Que en virtud de los numerales 18 y 19 del artículo 8° del Decreto 1369 de 2020, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios tiene competencia para organizar todos los servicios administrativos, así como expedir los actos administrativos,

reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones que la ley le otorga a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – la Superservicios;

Que la Superservicios presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, el estudio técnico conforme a lo establecido en los artículos 2.2.12.1 al 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, para efectos de modificar su estructura, ajustándola a un nuevo modelo de operación;

Que el estudio técnico referido obtuvo el concepto técnico favorable, razón por la cual, el Presidente de la República expidió los Decretos 1369 del 18 de octubre de 2020 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios” y 1370 del 18 de octubre de 2020 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes o representantes legales de las entidades estatales pueden delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes;

Que el artículo 122 de la Constitución Política dispone que “(...) [n]ingún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben (...)”;

Que el Decreto 648 de 2017, entre otras disposiciones, actualizó el régimen de ingreso, administración de personal, situaciones administrativas y retiro de los empleados públicos que se encuentra compilado en el Título 5 y el Capítulo 1 del Título 11 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015;

Que el mencionado Decreto 648 de 2017, definió las situaciones administrativas bajo las cuales se puede encontrar el empleado público y fijó la competencia para su otorgamiento en cabeza del representante legal de la entidad pública;

Que mediante la Resolución SSPD número 20201000053885 del 23 de noviembre de 2020, se delegaron unas funciones;

Que conforme lo expuesto, se requiere unificar en un solo acto administrativo las funciones delegadas por parte de la Superintendente con el objetivo de cumplir con los principios de eficiencia y eficacia administrativa y, para ajustar dichas funciones a la nueva estructura y realidad establecidas a través de los Decretos 1369 y 1370 de 2020;

Que, en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la Oficina Asesora Jurídica la facultad de representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 11 del Decreto 1369 de 2020.

Parágrafo. La facultad de representación judicial y extrajudicial incluye la posibilidad de otorgar poderes especiales y generales para los distintos procesos y procedimientos.

Artículo 2°. Delegar en los Superintendentes Delegados de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y de Energía y Gas Combustible dentro de su ámbito sectorial las siguientes funciones:

- 1) Imponer las siguientes sanciones a los prestadores de servicios públicos domiciliarios que violen las normas a las que deban estar sujetos, según la naturaleza y la gravedad de la falta:
 - a) Amonestación;
 - b) Multas.
- 2) Sancionar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios cuando no apliquen, al cobro de sus tarifas residenciales, las estratificaciones adoptadas por decretos de los alcaldes, máximo cuatro (4) meses después de vencidos los plazos previstos en el artículo 3° de la Ley 732 de 2000 y demás normas que regulen la materia.
- 3) Sancionar, en los términos de los artículos 51 y 90 de la Ley 1437 de 2011, a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, previa solicitud de explicaciones, cuando exista un acto administrativo que le imponga una obligación y este se resista a cumplirla.
- 4) Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en un procedimiento administrativo, tendiente a corregir violaciones de las normas relacionadas especialmente con los servicios públicos domiciliarios, una parte de las multas a las que se refiere el numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con la reglamentación expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al respecto.
- 5) Conceder o negar, mediante resolución motivada, el permiso a que se refiere el artículo 51 de la Ley 142 de 1994.
- 6) Recomendar a la administración de los prestadores sometidos a su inspección, vigilancia y control, la remoción del Auditor Externo de Gestión y Resultados cuando encuentre que este no cumpla cabalmente con sus funciones, de conformidad con el artículo 51 de la Ley 142 de 1994.
- 7) Adelantar las investigaciones, cuando las comisiones de regulación se lo soliciten, en los términos del numeral 73.18 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, e imponer las sanciones de su competencia. En este caso el Superintendente Delegado informará a la comisión de regulación sobre el estado y avance de dichas investigaciones, cuando así se lo soliciten.